

La legislatura echa el cierre con la deuda en máximos

■ A. S. A.

La deuda pública española no se reducirá hasta el año 2018. Lo dice el Fondo Monetario Internacional que asegura que los desequilibrios en el sector público son todavía notables y que la deuda cerrará este año en el 99,4% del PIB, a escasa décimas del 100%. El organismo dirigido por **Christine Lagarde** prevé que será el próximo año cuando se rebase ese umbral psicológico.

Un umbral psicológico que amenaza con instalarse por algún tiempo, a pesar de los vaivenes del dato y de, aseguran los expertos, el abaratamiento de las emisiones de deuda pública española no está sirviendo, de momento, para rebajar el volumen total del endeudamiento público del país. Con los datos de septiembre en la mano, la deuda del conjunto del sector público ha subido un pequeño escalón, hasta el 99,4% del PIB, el suficiente para situarse en el nivel más alto de su historia.

Y aunque no es comparable debido a una distancia vertiginosa en el tiempo, es curioso saber que, para encontrar un volumen de deuda pública semejante hay que remontarse hasta 1910, si bien los años para comparar adecuadamente son 1868 y 1896, cuando el nivel de endeudamiento era similar al actual y, además, la ratio de deuda sobre el PIB estaba también escalando. En aquellas situaciones históricas, la deuda siguió creciendo hasta hacerse insostenible para las finanzas



C. Lagarde.

“España, como el resto de las economías avanzadas, tendrá que acostumbrarse a convivir con altos niveles de deuda pública. Será una herencia a la que, de momento, no podemos renunciar”

públicas, con ratios del 165% en 1879 y 124% en 1900.

Lo cierto es que es imposible pintar un escenario semejante al del siglo pasado pero no deja de ser preocupante que la legislatura de **Mariano Rajoy** se cierre con 319.000 millones más de deuda pública.

Supone un crecimiento del 43%. En la legislatura anterior, **Rodríguez**

Zapatero, que, en términos de PIB había reducido el agujero a tasas desconocidas del 35% hasta 2007, aumentó la deuda en 359.732 millones, un 94% más.

Este nuevo máximo de la deuda en septiembre supone que cada español debe de media unos 23.000 euros frente a los 15.800 de hace cuatro años y los 8.500 al inicio de la crisis. Esos 1,062 billones suponen más de 29.000 euros de media por cada votante del 20-D

La magnitud de las cifras conocidas va más allá, pues ese 99,3% de pasivo público conjunto significa que España incumple ya, por seis décimas, el objetivo de deuda marcado por el Gobierno para todo el ejercicio: el 98,7% del PIB, de acuerdo con la última actualización del Programa de

Estabilidad remitido a Bruselas (en el Presupuesto de 2015 figuraba una meta de deuda pública superior, del 101,7% del PIB).

El virtual incumplimiento de la meta de deuda ya que en teoría, en el último trimestre de 2015 el pasivo podría bajar y/o el PIB podría crecer más de lo previsto hasta acompañar la ratio con el objetivo oficial, no es una sorpresa, y de hecho, la Comisión Europea

“La legislatura de Mariano Rajoy se cierra con 319.000 millones más de deuda pública. Supone un crecimiento del 43%”

pronostica que España cerrará este ejercicio económico con una deuda del 100,8%, que ascenderá al 101,3% el año próximo y cerrará 2017 en el 100,4% del PIB.

El Gobierno de Rajoy, en cambio, quita hierro a este incremento y confía en reducir el cociente entre deuda y PIB, gracias a que la actividad económica crecerá a mayor ritmo que el nuevo pasivo. Más en detalle, el **Ministerio de Economía** califica de un éxito relativo de la legislatura la ralentización del crecimiento de la deuda, que ahora sube a una tasa anual del 2,8%, frente al 14,5% que aumentaba a finales de 2011.

Un optimismo que se vio reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. En una línea electoralista, el **Consejo de Ministros** adelantó a julio de 2015

la presentación del proyecto de Presupuestos para 2016, para aprobarlo antes de la convocatoria de elecciones. Por su contenido, la intención del proyecto era ganar votantes: la rebaja del IRPF se adelantó al segundo semestre de 2015, con un coste recaudatorio de 1.500 millones de euros, se aumentó el sueldo de los funcionarios, se rebajó la tarifa de la luz con cargo al superávit de la tarifa eléctrica de 2015, se aprobaron medidas en favor de colectivos conflictivos con la Administración (autoconsumo eléctrico, ganaderos lácteos, mineros del carbón) y se repartieron 60 millones entre las comunidades autónomas. Para 2016 se preveía una reducción del gasto de los intereses de la deuda y de las prestaciones por desempleo y un aumento de la recaudación por el crecimiento económico, y se reduciría el déficit del 4,2% en 2105 al 2,8% del PIB en 2016. No es que haya dudas de que se cumplan estos objetivos, sino que este presupuesto no se aplicará por la incertidumbre de los resultados electorales.

El Gobierno puso su confianza en que la lenta reducción del déficit y en el crecimiento económico hicieran disminuir el endeudamiento público, aprovechando los bajos tipos de interés. Sin embargo, auguran los expertos, y a pesar de estas circunstancias, en el mejor de los casos se evitará una burbuja de la deuda, pero España, como el resto de las economías avanzadas, tendrá que acostumbrarse a convivir con altos niveles de deuda pública. Será una herencia a la que, de momento, no podemos renunciar.

Crónica mundana

Acuerdo de mínimos sobre el cambio climático

■ Manuel Espín

Nada menos que 20 años se ha tardado para lograr un pacto de mínimos sobre los efectos que la actividad humana provoca en el calentamiento del planeta, firmado ahora en **París** por 195 Estados. El acuerdo pone un techo de 2°C al aumento de las temperaturas y se propone un retorno a los 1,5°C en comparación con la era preindustrial. Pretende limitar los gases con efecto invernadero que son generados por la industria, la agricultura y los servicios, con unos plazos en los que dentro de cinco años se revisará la contribución de cada país a esta política. **Obama**, que llegó a la Presidencia con intención de reducir el calentamiento se felicita ahora por este acuerdo al que califica de “histórico”. Lo es desde el punto de que lo han firmado toda clase de gobiernos, y no sólo **Europa** (representada por el comisario de Cambio Climático, **Miguel Arias Cañete**) y **América del Norte**, que son los países más industrializados del planeta, sino **China** o **India**, gigantes que se encuentran a la cabeza de las naciones más contaminantes. Se produce además un reconocimiento internacional al gravísimo problema ambiental que está sufriendo el planeta, con un descenso del hielo en el **Ártico** de un 2,7% en los últimos diez años, lo que significa que a ese ritmo, en muy poco tiempo abundantes zonas de litoral se verán anegadas por el crecimiento del mar, y se transformarán las actividades



M. Arias Cañete.

humanas en varios territorios al ritmo de los cambios de temperatura. Esta admisión del problema como tal no es baladí: durante largos años se ha visto como el ultraliberalismo negaba constantemente el peligro desde una perspectiva más ideológica que científica: sin ir más lejos las posiciones de **Vaclav Havel**, e incluso las de representantes de la derecha republicana norteamericana (y española). Las evidencias científicas han sido constantes desde que se empezó a dar la señal de alarma y la catástrofe no es ninguna historia de ciencia-ficción sino que está a la vuelta de la esquina de no adoptar remedios para aminorar formas de actividad humana muy lesivas para el planeta. Otro de los elementos positivos del acuerdo de París está en la firma por parte de China,

enorme maquinaria industrial, para quien los efectos medioambientales han sido secundarios frente a su prioridad por el bajo coste y la competitividad de unos productos que han inundado el mundo. Ese modelo de producción, al que también se adscriben varios emergentes como India, es enormemente peligroso desde el punto de vista del clima.

Los críticos al pacto afirman que no va más allá de una declaración puramente nominativa y de las “buenas intenciones” sin un mecanismo real de control sobre el lanzamiento de gases que provocan el calentamiento del planeta. Según **James Hangson**, uno de los científicos “activistas” que más ha denunciado esa catástrofe en ciernes, el acuerdo de París, es un “fraude” dado que no contempla “acciones”, sino “sólo promesas” sin trascender más allá del territorio de lo testimonial. Considera que mientras siga siendo más barato el uso de ciertos combustibles “se seguirá quemando petróleo y carbón”, y pide la imposición de mayores impuestos a las industrias contaminantes. A la vez, los críticos consideran que no se contemplan en el acuerdo acciones compensatorias de los grandes estados industriales frente a los países con menos actividad de esas características. Sin embargo, la tradicional división Norte-Sur entre Estados industriales y sociedades agrícolas se ha quebrado con la presencia de China y de India en la cabecera de las sociedades con más actividad

industrial y a la vez con una menor conciencia de los riesgos.

El fenómeno del cambio climático y sus respuestas al problema ha de ser contemplada en clave no sólo científica, sino económica y política. Hasta ahora el petróleo junto al carbón han sido los combustibles que han movido la actividad industrial, con un ciclo que parece a punto de acabar pero ante el que resulta muy difícil tomar iniciativas para su recambio. La bajada en el precio del petróleo no es un incentivo a la disminución de los gases que provocan el deshielo en los polos, y para un buen número

“En cinco años deberán revisarse las medidas que cada Estado adopta para reducir las emisiones contaminantes”

“Críticas: no impone obligaciones ni menciona el petróleo y el carbón como responsables del calentamiento”

de Estados estos combustibles siguen siendo un verdadero monocultivo, con un tiempo perdido en el que han sido incapaces de generar nuevas alternativas a su actividad. Se podría decir lo mismo del carbón, con el añadido de que, a pesar de su obsolescencia, sigue siendo una modalidad esencial en comarcas en las que de no

adoptarse planes de reindustrialización se convertirían en desiertos demográficos. Este problema se contempló en carne viva en España con la marcha de los mineros de 2012 para reclamar planes para la reactivación de las cuencas frente a los proyectos de cierre de las mismas por su falta de competitividad. Y se convierte ahora en un tema candente en **Polonia** donde el nuevo gobierno de la derecha extrema pretende incentivar las ayudas al carbón frente a los criterios de la UE. En todos los casos, los cambios de actividad deben ser matizados con todo detalle para evitar fracturas sociales de imprevisibles consecuencias. El impulso a las fuentes de energía menos contaminantes como la solar o la eólica tropieza con decisiones de política europea e interior en clave española, tan extravagantes y contradictorias como las de los últimos años llevadas a cabo por el gobierno de **Rajoy**. En los que mientras se defiende de palabra esa fuente inagotable se pasa del calor al frío en las medidas de impulso al sector. Lo que parece claro en el pacto de París es que este asunto del efecto invernadero va en serio, y que no vale de nada poner la mirada en el ojo ajeno mientras se siguen emitiendo gases que la naturaleza es incapaz de reciclar por sí misma. También que no sólo es la industria quien produce esos gases, sino también la agricultura y el transporte, y que encarar el problema implica la adopción de cambios de gran calado social.